



Alcaldía de Medellín

**SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA  
INSPECCION 6B DE CONVIVENCIA Y PAZ  
CALLE 65 # 86-43 – 3855555 EXT. 9540**

**NOTIFICACIÓN PERSONAL**

ORDEN DE POLICÍA del 036 de JUNIO de 2026

El día 18 de JUNIO de 2026, siendo las 9:25 se notifica al señor (a): **JHON JAIRO VALENCIA VILLA**, identificado (a) con C.C. N°1.037.500.107, de la Orden de Policía que antecede. Quien se Ubica en **CR 75A 96-40 INT. 201** Se entrega copia íntegra de la Orden de Policía.

José U 3565210 (suegro)  
FIRMA

NOTIFICÓ: Mauren Cardona

ORDEN DE POLICÍA del 036 de JUNIO de 2026



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)







Alcaldía de Medellín

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA  
INSPECCION 6B DE CONVIVENCIA Y PAZ  
CALLE 65 # 86-43 – 3855555 EXT. 9540

**NOTIFICACIÓN PERSONAL**

ORDEN DE POLICÍA del 20 de ABRIL de 2026

El día 18 de Junio de 2026, siendo las 9:25am se notifica al señor (a): **MARIBEL VALENCIA VILLA**, identificado (a) con C.C. N°1.128.399.459, de la Orden de Policía que antecede. Quien se Ubica en **CR 75A 96-40 INT. 201** Se entrega copia íntegra de la Orden de Policía.

Juan 63565210 (padre)  
FIRMA

NOTIFICÓ: Lauren Cardona

ORDEN DE POLICÍA del 036 de JUNIO de 2026



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)







Alcaldía de Medellín

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA  
INSPECCION 6B DE CONVIVENCIA Y PAZ  
CALLE 65 # 86-43 – 3855555 EXT. 9540

**NOTIFICACIÓN PERSONAL**

ORDEN DE POLICÍA del 036 de JUNIO de 2026

El día 18 de Junio de 2026, siendo las 9:35 a.m. se notifica al señor (a): **AMPARO DE JESUS DURANGO TABORDA**, identificado (a) con C.C. N°42.935.272, de la Orden de Policía que antecede. Quien se Ubica en **CR 75A 96-70 INT. 9901** Se entrega copia íntegra de la Orden de Policía.

Johan Idrova 3226243187, 1223631449 (Nieta)  
FIRMA

NOTIFICÓ:

Hauert Cardona

ORDEN DE POLICÍA del 036 de JUNIO de 2026



www.medellin.gov.co







## Alcaldía de Medellín

**DISTRITO DE MEDELLÍN**  
**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA**  
**SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA**  
**INSPECCIÓN 6B DE POLICÍA URBANA DE PRIMERA CATEGORÍA**

### ACTA DE AUDIENCIA

RADICADO:	02-0013240-24
PRESUNTO INFRACTORES:	ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS
DIRECCIÓN:	CR 75A 96-70
INFRACCIÓN:	ARTÍCULO 135 LITERAL A) NUMERALES 3, Y 4 DE LA LEY 1801 DE 2016.
ASUNTO	<p><u>1.</u> Instalación Audiencia.</p> <p><u>2.</u> Antecedentes de la Acción.</p> <p><u>3.</u> Exposición de Argumentos y Material Probatorio.</p> <p><u>3.1.</u> Cierre de Etapa Probatoria y Valoración del Material Probatorio.</p> <p><u>4.</u> Consideraciones normativas y competencia del despacho.</p> <p><u>5.</u> Análisis del caso concreto y valoración jurídico-probatoria de los comportamientos investigados.</p> <p><u>5.1.</u> Construcción tercer piso: 128.00 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>5.1.</u> Sobre la medida de multa especial.</p> <p><u>5.2.</u> Ocupación espacio público: 11.03 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>6.</u> Orientación sobre la interposición de recursos.</p> <p><u>6.1.</u> Interposición de recursos.</p> <p><u>7.</u> Respuesta al recurso en sede de reposición.</p> <p style="text-align: center;"><b>RESUELVE</b></p>

#### 1. INSTALACIÓN AUDIENCIA:

En Medellín, a los **DIECISÉIS (16)** días del mes de **JUNIO** de dos mil veintiséis **(2026)**, siendo las **8:00 A.M.**, se constituye el Despacho en audiencia dentro del proceso verbal abreviado relacionado en el encabezado, para con ello, consignar la decisión de primera instancia que correspondería al caso.

Revisado el expediente administrativo 02-0013240-24, se observa que mediante las comunicaciones visibles a **folios 69 a 90** fueron debidamente citados y convocados los sujetos procesales e intervinientes para comparecer a la diligencia de comunicación de la decisión de primera instancia que previamente fue fijada para el día diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026) a las 10:00 A.M, no



## Alcaldía de Medellín

En atención a lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, disposición cuya constitucionalidad fue examinada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-349 de 2017, así como con lo establecido en el artículo 2.2.8.18.5.3. del Decreto 0768 de 2025, se otorgó a los ausentes el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de la diligencia, con el fin de que acreditaran la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier circunstancia jurídicamente relevante que justificara su incomparecencia, vencido dicho término, el Despacho constata que no obra en el expediente memorial, escrito, solicitud o documento alguno presentado por los sujetos procesales o intervinientes convocados tendiente a justificar su ausencia a la diligencia programada para el día diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026).

En estas condiciones, una vez agotada la oportunidad procesal en mención, corresponde a esta autoridad continuar con el trámite administrativo conforme a las reglas previstas en el parágrafo 1° del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, interpretado en armonía con los criterios fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-349 de 2017 y con el procedimiento reglamentario consagrado en el artículo 2.2.8.18.5.3. del Decreto 0768 de 2025, en consecuencia, se deja expresa constancia de la nueva inasistencia injustificada de los sujetos procesales e intervinientes convocados a la diligencia de comunicación de la decisión de primera instancia y, encontrándose satisfechos los presupuestos normativos exigidos para el efecto, procede este Despacho a surtir la actuación subsiguiente prevista en la normatividad vigente para la comunicación de la decisión adoptada dentro del presente procedimiento administrativo.

### 2. CONSIDERACIONES INICIALES

Mediante audiencia celebrada el día veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025), este Despacho dispuso la suspensión del presente procedimiento policivo urbanístico y concedió a la presunta infractora un término de sesenta (60) días hábiles para que acudiera ante la autoridad urbanística competente a efectos de adelantar las actuaciones tendientes a obtener el reconocimiento o la correspondiente licencia urbanística respecto de las intervenciones objeto de investigación, según consta en el registro de audio de la diligencia (**minuto 46:00**), esta decisión habría encontrado fundamento en el marco normativo que regula los comportamientos contrarios a la integridad urbanística y en los principios que orientan el ejercicio de la función de policía. En particular, en los principios de *necesidad, razonabilidad y proporcionalidad* consagrados en la Ley 1801 de 2016, los cuales imponen a las autoridades el deber de adoptar medidas adecuadas a las circunstancias concretas del caso y de privilegiar, cuando ello sea jurídicamente viable, mecanismos orientados a la regularización de las situaciones urbanísticas antes de acudir a la imposición de medidas correctivas definitivas.

En el mismo sentido, el *parágrafo 2 del artículo 135 de la Ley 1801 de 2016* contempla la posibilidad de que el presunto infractor adelante ante la autoridad urbanística competente los trámites dirigidos a obtener la legalización, reconocimiento o





## Alcaldía de Medellín

la actuación de las autoridades de policía hacia la adopción de decisiones acordes con los principios ya citados.

Bajo tales presupuestos, el término concedido por este Despacho tuvo como finalidad garantizar a la presunta infractora una oportunidad real y efectiva para acreditar la eventual conformidad urbanística de las intervenciones investigadas, permitiendo que la autoridad competente se pronunciara sobre la viabilidad de su reconocimiento o licenciamiento, antes de que esta Inspección adoptara una decisión definitiva respecto de los comportamientos objeto de investigación, ahora bien, revisado integralmente el expediente administrativo una vez vencido el término otorgado, se advierte que no obra solicitud radicada ante autoridad urbanística, constancia de trámite, acto administrativo, certificación o cualquier otro elemento probatorio que permita establecer que la presunta infractora hubiese promovido actuaciones orientadas a obtener el reconocimiento o la licencia urbanística de las obras investigadas. Tampoco existe evidencia que permita inferir el inicio de gestión alguna encaminada a la regularización urbanística de las intervenciones reportadas.

En consecuencia, al haberse agotado la oportunidad otorgada por esta autoridad sin que se acreditara gestión alguna tendiente a la legalización urbanística de las obras objeto de investigación, desaparecen las circunstancias que justificaron la suspensión temporal del procedimiento, razón por la cual corresponde reanudar la presente actuación administrativa, continuar con las etapas procesales previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 y adoptar la decisión de 1º instancia que EN derecho corresponda frente a los comportamientos investigados a partir de los siguientes .

### **3. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN:**

- 3.1.1. Las presentes diligencias administrativas tuvieron origen en la queja presentada por el señor JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI el día dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), mediante la cual puso en conocimiento de esta autoridad presuntas intervenciones urbanísticas adelantadas en el inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70 del barrio San Martín de Porres, Distrito Especial de Medellín, relacionadas con la presunta construcción de un tercer piso sin el lleno de los requisitos urbanísticos legalmente exigidos. **(ver folio 2)**
- 3.1.2. Seguidamente, mediante el radicado 20231035007 del 20/10/2023, la señora Amparo de Jesús Durango Torres, presentó derecho de petición en interés particular, para con ello, solicitar intervención con respecto a los mismos hechos citados en el numeral precedente. **(ver folio 10)**
- 3.1.3. De acuerdo con las gestiones hasta aquí descritas , mediante orden de policía N° 110 del 20 de septiembre del 2023, se ordenó la inspección ocular en la dirección génesis de la presunta irregularidad, procedimiento que derivó en la orden de suspensión y sellamiento de las obras que allí se ejecutaban. **(ver folio 3 a 6)**

- 3.1.4. En atención a la referida queja, mediante consigna realizada en ya citada fecha



## Alcaldía de Medellín

con radicado No. 202320216836 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), suscrito por CARLOS BAYRO GARCÍA CORREA, Líder de Programa de la Secretaría de Gestión y Control Territorial.(ver folio 13 a 19)

- 3.1.5. En el citado informe técnico 202320216836 se dejó constancia de que, una vez realizada la inspección al inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70, barrio San Martín de Porres, se encontró una edificación conformada por tres (3) pisos y cuatro (4) destinaciones de vivienda, evidenciándose además la ejecución de obras correspondientes a construcción de tercer piso y la modificación de cobertura vegetal mediante adecuación de zona dura sobre espacio público, se indicó igualmente que la visita fue atendida por la señora MARIA CAMILA SANCHEZ.
- 3.1.6. De conformidad con la consulta urbanística efectuada a través del aplicativo MapGis9 y con fundamento en el Acuerdo Municipal 048 de 2014 —Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Medellín—, el inmueble objeto de investigación se encuentra localizado en el polígono Z2\_CN2\_55, correspondiente al tratamiento urbanístico de Consolidación Nivel 2, con categoría de uso “*Áreas y corredores de media mixtura*”, subcategoría predominantemente residencial, estableciéndose como aprovechamientos urbanísticos una altura normativa máxima de tres (3) pisos y una densidad habitacional máxima de doscientas cincuenta (250) viviendas por hectárea, equivalente para el caso concreto a cuatro (4) destinaciones de vivienda.
- 3.1.7. Asimismo, el informe técnico refiere que fueron consultadas las bases de datos institucionales UrbaMed, Visor Documental 360 y las plataformas suministradas por las Curadurías Urbanas de Medellín, sin encontrarse licencia urbanística vigente, licencia de construcción otorgada recientemente o trámite urbanístico radicado en estudio respecto del inmueble objeto de verificación.
- 3.1.8. En relación con las áreas comprometidas por las intervenciones detectadas, la Secretaría de Gestión y Control Territorial estableció las siguientes dimensiones objeto de presunta infracción urbanística: ocupación de espacio público en un área aproximada de once punto cero tres metros cuadrados (11.03 m<sup>2</sup>); construcción en primer piso con un área de ciento veintiocho metros cuadrados (128.00 m<sup>2</sup>); construcción en segundo piso con igual área de ciento veintiocho metros cuadrados (128.00 m<sup>2</sup>); y construcción de tercer piso igualmente con un área aproximada de ciento veintiocho metros cuadrados (128.00 m<sup>2</sup>).
- 3.1.9. Finalmente, el informe técnico señaló que no fue posible determinar con precisión la antigüedad de las construcciones identificadas; no obstante, precisó expresamente que las intervenciones realizadas sobre bienes de uso público no son susceptibles de prescripción, razón por la cual su restitución resulta procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Ley 1801 de 2016.



## Alcaldía de Medellín

obrantes en el expediente, mediante auto del veintinueve (29) de julio de dos mil veinticuatro (2024), este despacho dispuso dar apertura al presente procedimiento verbal abreviado, de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y 223 de la Ley 1801 de 2016, por la presunta materialización de comportamientos contrarios a la integridad urbanística. En desarrollo de la actuación administrativa, el día trece (13) de agosto (2024) y tres (03) de septiembre del mismo año se llevó a cabo audiencia pública, oportunidad procesal en la cual fueron escuchados los argumentos expuestos por las partes e intervinientes dentro de la presente actuación.

En calidad de peticionario, el señor JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI manifestó que el señor LUIS JAVIER VALENCIA es propietario del inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70 interior 101 y que la señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS adelantó la construcción de un tercer piso sin licencia urbanística y sin tener en consideración las condiciones estructurales de la edificación existente, indicando además que el acceso a la construcción presuntamente ejecutada es independiente y que el cerramiento fue realizado con autorización del propietario del primer nivel. Por su parte, el señor LUIS JAVIER VALENCIA TABORDA manifestó ser propietario del primer piso del inmueble objeto de investigación y señaló que la queja no fue instaurada directamente por él sino por su yerno, señor JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI, indicando igualmente su inconformidad frente a presuntas afectaciones derivadas de tuberías que, según refiere, le estarían ocasionando humedad en el primer piso de la edificación. A su turno, la señora MARIBEL VALENCIA VILLA expresó que la presentación de la queja obedeció a la preocupación generada por la construcción del tercer piso, particularmente frente a los posibles perjuicios que dicha intervención pudiera ocasionar sobre la estructura existente, de igual forma, la señora AMPARO DE JESUS DURANGO TABORDA manifestó ser propietaria del sótano del inmueble y expresó su preocupación respecto de la carga estructural que soporta dicho nivel frente a las obras ejecutadas, así como por la existencia de tuberías que, según indicó, le estarían causando afectaciones en la cubierta y techo de su inmueble.

En calidad de apoderado de la presunta infractora, el doctor FELIPE FRANCO ESTRADA solicitó la suspensión de la diligencia con el propósito de adelantar trámites urbanísticos ante la Curaduría Urbana competente, manifestando que el asunto podía ser objeto de regularización administrativa. Finalmente, la señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS manifestó que procedió a vaciar la losa debido a que el techo existente había colapsado, afirmación que constituye reconocimiento parcial de la ejecución material de las intervenciones constructivas advertidas por la autoridad urbanística en el informe técnico obrante dentro del expediente. No obstante lo anterior, y como ya se indicó, pese al término otorgado por esta autoridad en aplicación del parágrafo 2° del artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, a la fecha no obra dentro del expediente prueba documental idónea que permita acreditar la radicación, trámite u obtención de licencia urbanística, reconocimiento de edificación o actuación de legalización ante Curaduría Urbana competente respecto de las intervenciones objeto de investigación.



## Alcaldía de Medellín

elementos materiales probatorios recaudados durante la presente actuación administrativa, procede este despacho a declarar cerrada la etapa probatoria dentro de esta instancia procesal y a efectuar la correspondiente valoración integral del acervo obrante en el libelo, conforme a las reglas de la sana crítica y en observancia de los principios de legalidad, debido proceso y contradicción. En consecuencia, se tienen como pruebas legal y oportunamente incorporadas al expediente y gestiones documentales las siguientes:

- ✓ Formato de queja. **Folio 2.**
- ✓ Consigna y orden de policía consistente en suspensión de obra de fecha veinte (20) de septiembre de 2023. **Folios 3 al 6.**
- ✓ Oficio dirigido a la Secretaría de Gestión y Control Territorial con radicado No. 202320137657 del veintiuno (21) de septiembre de 2023. **Folios 7 al 8.**
- ✓ Oficio dirigido a la Estación de Policía Doce de Octubre con radicado No. 202330900975 del once (11) de octubre de 2023. **Folio 9.**
- ✓ PQRS con radicado No. 202310350077 del veinte (20) de octubre de 2023. **Folios 10 al 12.**
- ✓ Informe técnico emitido por la Secretaría de Gestión y Control Territorial con radicado No. 202320216836 del veintiuno (21) de diciembre de 2023. **Folios 13 al 19.**
- ✓ Auto de apertura del procedimiento verbal abreviado de fecha veintinueve (29) de julio de 2024. **Folio 21.**
- ✓ Ficha catastral y certificado de tradición y libertad – VUR. **Folios 23 al 27.**
- ✓ Solicitud de acompañamiento al Ministerio Público para audiencia pública. **Folio 28.**
- ✓ Acta de audiencia pública de fecha trece (13) de agosto de 2024. **Folios 32 al 34.**
- ✓ Acta de audiencia pública de fecha tres (03) de septiembre de 2024. **Folios 38 al 42.**
- ✓ Constancia de aplazamiento de audiencia de fecha veinte (20) de noviembre de 2024, por diligencias administrativas del despacho. **Folio 47.**
- ✓ Solicitud de acompañamiento al Ministerio Público. **Folio 51.**
- ✓ Constancia de aplazamiento de audiencia de fecha diecinueve (19) de marzo de 2025, con ocasión de la entrega administrativa del despacho. **Folio 63.**
- ✓ Constancia de asignación de funciones como Inspectora de Policía Urbana de Primera Categoría de fecha quince (15) de mayo de 2025. **Folio 68.**

Así mismo, se incorporan y valoran los documentos y manifestaciones allegadas y practicadas durante el desarrollo de las audiencias surtidas dentro del presente trámite administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223, numeral 3, literal c) de la Ley 1801 de 2016.

### **5. CONSIDERACIONES NORMATIVAS y COMPETENCIA DEL DESPACHO:**

Previo a efectuar el análisis de fondo respecto de los comportamientos urbanísticos investigados, considera pertinente este despacho realizar algunas precisiones en torno al marco constitucional, legal y reglamentario que gobierna



## Alcaldía de Medellín

finés esenciales del Estado consagrados en el *artículo 2 de la Constitución Política*, particularmente en el deber de las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, así como garantizar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, de igual manera, los artículos 58 y 82 de la Constitución Política imponen a las autoridades públicas el deber de proteger la propiedad privada conforme a su función social y ecológica, así como velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, prevaleciendo el interés general sobre el interés particular.

Bajo dicho marco constitucional, la *Ley 1801 de 2016* establece como finalidad de la actividad y función de policía la preservación de las condiciones necesarias para la convivencia, asignando a las autoridades de policía competencias orientadas al restablecimiento del orden urbanístico y a la protección de los bienes de uso público, el espacio público y la integridad urbanística del territorio.

En este sentido, los *artículos 7 y 8 de la Ley 1801 de 2016* disponen que toda actuación de policía deberá sujetarse a los principios de legalidad, *necesidad, proporcionalidad y razonabilidad*, imponiendo a las autoridades el deber de adoptar únicamente aquellas medidas correctivas estrictamente necesarias e idóneas para restablecer las condiciones de convivencia afectadas.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante Sentencia *C-492 de 2002*, precisó que la función de policía se encuentra sometida a límites constitucionales y convencionales, particularmente a los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad e igualdad, de manera que las medidas adoptadas por la administración deben responder a finalidades legítimas y constitucionalmente admisibles.

En materia urbanística, la *Ley 388 de 1997*, en su *artículo 99*, estableció la obligación de obtener previamente licencia urbanística para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento y demás actuaciones urbanísticas sobre bienes inmuebles localizados en suelo urbano, rural o de expansión urbana.

En concordancia con lo anterior, el *Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015*, particularmente en sus *artículos 2.2.6.1.1.1 y 2.2.6.1.1.3*, define la licencia urbanística como la autorización previa expedida por Curador Urbano o autoridad competente para adelantar actuaciones de urbanización, construcción, subdivisión e intervención u ocupación del espacio público, atribuyendo a las Curadurías Urbanas la competencia para estudiar, revisar y expedir dichas autorizaciones, previa verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y estructurales aplicables.

Así mismo, el *artículo 2.2.6.1.2.2.3* de la codificación en cita establece que corresponde a las autoridades urbanísticas competentes efectuar la revisión técnica, jurídica y urbanística de los proyectos sometidos a licenciamiento, razón por la cual cualquier intervención constructiva puede ejecutarse válidamente sin la



## Alcaldía de Medellín

Por su parte, el *Decreto 1203 de 2017*, mediante el cual se modificaron disposiciones relativas al régimen de licencias urbanísticas, reiteró la obligatoriedad del licenciamiento previo para las actuaciones de construcción y reconocimiento de edificaciones, así como la necesidad de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas, estructurales y de ordenamiento territorial vigentes.

En el ámbito local, el *Acuerdo 048 de 2014* —Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Medellín— regula los aprovechamientos urbanísticos, tratamientos, usos del suelo, densidades y condiciones de ocupación aplicables al territorio distrital, estableciendo, entre otros aspectos, los criterios de consolidación urbana, las áreas de media mixtura y las limitaciones urbanísticas aplicables a los inmuebles ubicados dentro del polígono Z2\_CN2\_55, identificado dentro de la presente actuación.

En igual sentido, los *artículos 168 y 194 del Acuerdo 048 de 2014* establecen disposiciones relacionadas con la protección del espacio público, la prevalencia del interés general y la obligación de preservar las áreas destinadas al disfrute colectivo y circulación pública.

Ahora bien, el *artículo 135 de la Ley 1801 de 2016* consagra expresamente como comportamientos contrarios a la integridad urbanística las actuaciones consistentes en parcelar, urbanizar, intervenir, ocupar o construir en bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público, así como ejecutar construcciones sin licencia urbanística o cuando esta hubiere caducado.

A su vez, el *artículo 140 ibidem* establece como comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público la ocupación, intervención o alteración indebida de bienes destinados al uso común, facultando a las autoridades de policía para ordenar su restitución y recuperación.

Respecto de la protección constitucional del espacio público, la Corte Constitucional, mediante *Sentencia T-327 de 2018*, reiteró que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, precisando que ningún particular puede alegar derechos adquiridos sobre ellos ni consolidar situaciones jurídicas derivadas de ocupaciones irregulares.

En concordancia con lo anterior, el *artículo 139 de la Ley 1801 de 2016* define el espacio público como el conjunto de bienes y elementos destinados a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los intereses individuales, mientras que el *artículo 226 ibidem* dispone expresamente que no existe caducidad de la acción policiva cuando se trate de perturbaciones u ocupaciones sobre bienes de uso público o espacio público.

Finalmente, resulta pertinente señalar que el *Decreto Nacional 0768 de 2025*, particularmente en sus *artículos 2.2.8.18.2.1, 2.2.8.18.2.2* y las Secciones 6 y 7 del régimen policivo urbanístico, estableció parámetros procedimentales y criterios de decisión orientados al restablecimiento de la integridad urbanística, la restitución



## Alcaldía de Medellín

Bajo las anteriores consideraciones normativas y jurisprudenciales, procede este despacho a efectuar el análisis integral de los hechos, las pruebas recaudadas y la adecuación típica de las conductas investigadas frente a los comportamientos previstos en la Ley 1801 de 2016 y demás disposiciones urbanísticas aplicables.

### **6. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Y VALORACIÓN JURÍDICO-PROBATORIA DE LOS COMPORTAMIENTOS INVESTIGADOS**

De conformidad con lo dispuesto en el *artículo 223 de la Ley 1801 de 2016*, así como en los *artículos 2.2.8.18.2.2 y 2.2.8.18.7.1 del Decreto Nacional 0768 de 2025*, procede este despacho a efectuar el análisis integral de los hechos, las pruebas recaudadas y la adecuación jurídica de los comportamientos urbanísticos investigados, con el propósito de determinar la existencia o no de responsabilidad frente a las conductas reportadas por la Secretaría de Gestión y Control Territorial mediante informe técnico con *radicado No. 202320216836 del veintiuno (21) de diciembre de 2023*.

Con fundamento en el citado informe técnico, se identificaron como presuntas intervenciones urbanísticas objeto de investigación las siguientes:

- Construcción primer piso: ciento veintiocho metros cuadrados (128.00 m<sup>2</sup>).
- Construcción segundo piso: ciento veintiocho metros cuadrados (128.00 m<sup>2</sup>).

Respecto de dichas intervenciones, encuentra esta agencia administrativa que el material probatorio obrante dentro del expediente no permite acreditar con el grado de certeza requerido, ni la fecha cierta de ejecución de las construcciones correspondientes al primer y segundo nivel, ni la individualización concreta del sujeto responsable de dichas intervenciones urbanísticas. En efecto, el informe técnico emitido por la Secretaría de Gestión y Control Territorial da cuenta de la existencia física de una edificación de tres pisos y cuatro destinaciones de vivienda; no obstante, la misma autoridad técnica dejó consignado expresamente que *“la antigüedad de la infracción se desconoce”*, circunstancia que adquiere especial relevancia probatoria al momento de determinar la autoría material de estas obras y la posibilidad jurídica de imputar responsabilidad administrativa a persona determinada.

Así mismo, durante el desarrollo de la audiencia pública surtida el tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), los señores: AMPARO DE JESUS DURANGO TABORDA, MARIBEL VALENCIA VILLA, LUIS JAVIER VALENCIA TABORDA y JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI coincidieron en señalar que las preocupaciones existentes se relacionaban principalmente con la construcción del tercer piso y las posibles afectaciones estructurales derivadas de dicha intervención, particularmente en lo referente a cargas estructurales, humedades y afectaciones internas de la edificación, en ese sentido, la señora AMPARO DE JESUS DURANGO TABORDA manifestó que su preocupación radicaba en que el sótano soportaba el peso de la edificación y en las afectaciones generadas por tuberías en el techo; la señora MARIBEL VALENCIA VILLA indicó que la queja se



## Alcaldía de Medellín

UPEGUI señaló específicamente que la señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS había construido el tercer piso sin licencia urbanística.

Finalmente, la señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS manifestó expresamente haber ejecutado el vaciado de la losa correspondiente al tercer nivel, argumentando que dicha actuación obedeció al colapso previo del techo existente, manifestación que constituye elemento de juicio relevante frente a la intervención urbanística asociada al tercer piso, mas no respecto de las construcciones correspondientes al primer y segundo nivel de la edificación. Bajo ese contexto probatorio, considera este despacho que no existen elementos técnicos, documentales ni testimoniales suficientes que permitan concluir de manera cierta y objetiva que los señores AMPARO DE JESUS DURANGO TABORDA, MARIBEL VALENCIA VILLA, LUIS JAVIER VALENCIA TABORDA y JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI hubiesen ejecutado, promovido o materializado las construcciones correspondientes al primer y segundo piso del inmueble objeto de investigación. Por el contrario, del análisis integral del expediente se desprende que, para el momento en que dichas personas adquirieron o comenzaron a ocupar los distintos niveles del inmueble, las construcciones correspondientes al primer y segundo piso ya se encontraban materialmente consolidadas, situación que impide atribuirles responsabilidad administrativa urbanística frente a tales intervenciones.

Adicionalmente, debe precisarse que en materia sancionatoria administrativa policiva resulta imperativo que la responsabilidad se encuentre plenamente demostrada mediante pruebas ciertas, directas y concordantes, en observancia de los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y responsabilidad personal consagrados en la Constitución Política y desarrollados por la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa.

En consecuencia, la ausencia de certeza respecto de la antigüedad de las construcciones correspondientes al primer y segundo nivel, aunada a la inexistencia de prueba técnica o documental que individualice a los presuntos responsables de dichas obras, genera una duda razonable que impide a esta autoridad adoptar una decisión sancionatoria respecto de tales intervenciones urbanísticas, motivo por el cual no se encuentra acreditada la materialización de comportamientos contrarios a la integridad urbanística atribuibles a las personas antes relacionadas frente a las construcciones correspondientes al primer y segundo piso del inmueble investigado.

### **6.1. Construcción tercer piso: 128.00 m<sup>2</sup>**

Respecto de la intervención correspondiente a la construcción del tercer piso con un área aproximada de ciento veintiocho metros cuadrados (128.00 m<sup>2</sup>), encuentra este despacho que sí existe prueba suficiente, clara y concordante que permite acreditar la materialización de comportamientos contrarios a la integridad urbanística previstos en el *artículo 135, literal A), numeral 4 de la Ley 1801 de 2016*, consistentes en ejecutar actuaciones constructivas sin la obtención previa de





## Alcaldía de Medellín

en el inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70 del Distrito Especial de Medellín, sin que se encontrara licencia urbanística vigente o trámite de licenciamiento radicado ante Curaduría Urbana competente, aunado a ello, obra dentro del expediente orden de policía consistente en suspensión inmediata de la obra emitida por esta Inspección el día veinte (20) de septiembre de 2023, mediante la cual se dispuso la paralización inmediata de las actuaciones urbanísticas adelantadas en el tercer piso del inmueble objeto de investigación, al evidenciarse que sobre la losa que servía de cubierta del segundo nivel se adelantaban obras constructivas destinadas a la conformación de una nueva unidad de vivienda sin licencia urbanística. Dicha orden fue debidamente notificada y fijada en el acceso del inmueble, conforme consta en los **folios 4 al 7** del expediente, no obstante, la medida correctiva impuesta y la orden expresa de suspensión de las actuaciones urbanísticas, se evidencia dentro del expediente que las intervenciones continuaron ejecutándose, desconociendo las órdenes impartidas por esta autoridad de Convivencia y Paz, persistiendo así en la ejecución de obras sin el lleno de los requisitos urbanísticos exigidos por la normatividad vigente.

De igual forma, durante la audiencia pública surtida el tres (03) de septiembre de 2024, el señor JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI manifestó expresamente que la señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS "...construyó un tercer piso sin licencia"...", mientras que la misma señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS reconoció haber ejecutado el vaciado de la losa correspondiente al tercer nivel, indicando que dicha intervención obedeció al colapso previo del techo existente, circunstancia que constituye aceptación parcial de la ejecución material de la obra urbanística investigada, así mismo, del análisis integral del expediente se evidencia que las actuaciones urbanísticas correspondientes al tercer piso fueron ejecutadas con posterioridad a la entrada en vigencia del *Acuerdo 048 de 2014* — Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Medellín—, razón por la cual las mismas se encontraban plenamente sometidas al cumplimiento de las normas urbanísticas y al deber de obtención previa de licencia urbanística conforme a las disposiciones contenidas en la *Ley 388 de 1997*, el *Decreto 1077 de 2015* y el *Decreto 1203 de 2017*.

En consecuencia, considera este despacho plenamente acreditado que la señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS materializó comportamientos contrarios a la integridad urbanística previstos en el *artículo 135, literal A), numeral 4 de la Ley 1801 de 2016*, al ejecutar obras de construcción en el inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70 sin licencia urbanística expedida por autoridad competente, en tal sentido, frente a la procedencia de medidas correctivas, debe precisarse que dentro del expediente no obra prueba que permita establecer la existencia de trámite de reconocimiento, legalización urbanística o licencia de construcción vigente respecto de las obras ejecutadas en el tercer piso, pese al término otorgado por esta autoridad para acudir ante Curaduría Urbana competente en aplicación del principio de oportunidad previsto en el *parágrafo 2° del artículo 135 de la Ley 1801 de 2016*, así las cosas, y atendiendo a que las obras continúan careciendo de soporte urbanístico habilitante, se hace procedente ordenar la demolición de la construcción ejecutada sin licencia en el tercer piso del inmueble



## Alcaldía de Medellín

En consecuencia, se ordenará a la señora ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS efectuar, por su cuenta y riesgo, el reintegro del urbanismo correspondientes al tercer piso ejecutado sin licencia urbanística, concediéndose para ello un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión administrativa.

### 5.1. Sobre la medida de multa especial

En relación con la medida correctiva de multa especial por infracción urbanística, considera este despacho que su imposición resulta plenamente procedente y necesaria en el presente asunto, lo anterior, por cuanto no se está frente a una simple omisión formal derivada de la ausencia inicial de licencia urbanística, sino ante una conducta persistente y consciente de desconocimiento de las disposiciones urbanísticas y de las órdenes impartidas por la autoridad de Convivencia y Paz 6B.

En efecto, como ya se indicó, obra dentro del expediente orden de suspensión inmediata de construcción emitida el día veinte (20) de septiembre de 2023, mediante la cual se dispuso la paralización de las actuaciones adelantadas en el tercer piso del inmueble objeto de investigación, no obstante, pese a la existencia de dicha orden, debidamente comunicada y materializada por esta autoridad, las obras continuaron ejecutándose hasta su culminación, circunstancia que evidencia un abierto desconocimiento de las facultades de policía urbanística y de los mandatos impartidos para la protección del orden urbanístico. Aunado a lo anterior, durante el desarrollo del presente procedimiento se otorgó a la infractora la posibilidad de acudir ante la Curaduría Urbana competente con el fin de gestionar la correspondiente licencia, reconocimiento o mecanismo de regularización urbanística que resultara procedente, en aplicación de los principios de favorabilidad, coordinación institucional y prevalencia del restablecimiento del orden urbanístico sobre la mera imposición de cargas económicas. Sin embargo, pese al tiempo concedido para tal efecto, no obra dentro del expediente prueba alguna que permita acreditar la radicación de solicitud, el inicio de trámite urbanístico o la obtención de autorización que habilite las obras ejecutadas, así las cosas, la conducta desplegada revela no solo la materialización del comportamiento contrario a la integridad urbanística previsto en el *artículo 135, literal A), numeral 4 de la Ley 1801 de 2016*, sino también una actitud de persistencia en la infracción y de desatención a las oportunidades brindadas por la administración para la regularización de la situación jurídica del inmueble. En tales condiciones, la imposición de la multa especial prevista en los artículos 135 y 181 *ibídem* se muestra como una medida necesaria, razonable y proporcional, a la falta, orientada a reprochar la conducta desplegada, desestimular la reiteración de este tipo de comportamientos y garantizar la efectividad de las decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la protección del orden urbanístico.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que una decisión limitada exclusivamente a ordenar la demolición de la obra ilegalmente ejecutada resultaría insuficiente frente al grado de incumplimiento evidenciado en desarrollo



## Alcaldía de Medellín

con la multa especial por infracción urbanística resulta plenamente justificada, necesaria y compatible con lo dispuesto en el párrafo único del artículo 212 de la Ley 1801 de 2016, que autoriza la aplicación simultánea de varias medidas correctivas cuando ello resulte necesario para la protección de la convivencia y el restablecimiento del orden jurídico vulnerado, no obstante, se advierte al destinatario (a) de la misma, que en arreglo a lo señalado en el artículo 137 de la Ley 1801 del 2016, no habrá lugar al cobro o materialización de la multa especial anunciada, si ante de la declaratoria en firme de la condición de infractor (a) del régimen de obras, se aporta ante este despacho prueba del reintegro del urbanismo en la multicitada dirección e inmueble, esto es, bien sea obteniendo la patente que corresponda o retirando lo irregularmente construido.

### 5.2. Tasación Multa Especial:

Para efectos de la tasación de la multa, se tendrán en consideración las áreas determinadas por la Secretaría de Gestión y Control Territorial en el Informe Técnico No. 202320216836 del 21/12/2023, correspondiente a ciento veintiocho punto cero metros cuadrados (128.00 m<sup>2</sup>) por concepto de privatización de la construcción de un tercer piso. De igual forma, se tendrá en cuenta que el inmueble se encuentra clasificado en estrato socioeconómico tres (3), razón por la cual la liquidación se efectuará conforme a los parámetros previstos para dicho estrato en el numeral 2 del artículo 181 de la Ley 1801 de 2016, aplicando el criterio más favorable al investigado (a) dentro de los márgenes legalmente establecidos.

Por consiguiente, la liquidación resultante en principio supera ampliamente los límites máximos previstos por el legislador. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del numeral 2 del artículo 181 de la Ley 1801 de 2016, según el cual la multa especial por infracción urbanística no podrá superar los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes ni el valor catastral del inmueble, este Despacho encuentra que el límite aplicable en el presente asunto corresponde a un total de **VEINTE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L (\$20.089.000)**, de acuerdo a la información catastral del avalúo total de del inmueble reportado en el informe técnico No. 202320216836 del 21/12/2023, y el estrato del inmueble.

En consecuencia, la multa especial por infracción urbanística será impuesta hasta el monto máximo legalmente procedente para el caso concreto, correspondiente a la suma de **VEINTE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L (\$20.089.000)**.

### 5.3. Ocupación espacio público: 11.03 m<sup>2</sup>

Respecto de la ocupación de espacio público correspondiente a un área aproximada de once punto cero tres metros cuadrados (11.03 m<sup>2</sup>), el informe técnico emitido por la Secretaría de Gestión y Control Territorial estableció la existencia de cambio de cobertura vegetal por zona dura y cerramiento sobre área



## Alcaldía de Medellín

*permiso del señor Luis Javier (...)*”, reconocimiento que permite atribuirle de manera directa la materialización de la ocupación indebida del espacio público identificada dentro del informe técnico.

En consecuencia, encuentra este despacho acreditada la configuración del comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público previsto en el *artículo 135, literal A), numeral 3 ibidem*, razón por la cual resulta procedente ordenar la restitución del área indebidamente ocupada, por ello, se ordenará al señor JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI retirar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento ubicado en el inmueble de la Carrera 75A No. 96-70, primer piso, restituyendo plenamente el espacio público intervenido, para lo cual se concede un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

Para el caso, este despacho se abstendrá de imponer multa especial respecto de dicha conducta, por considerar que la orden de restitución y remoción del cerramiento constituye una medida suficiente, necesaria y proporcional para lograr el restablecimiento efectivo del espacio público afectado, conforme a los principios previstos en el artículo 8 de la Ley 1801 de 2016. Por último, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223, numeral 3, literal d) de la Ley 1801 de 2016, se dará publicidad a la presente decisión, cuya notificación se surtirá en estrados mediante la entrega del correspondiente traslado escrito a las partes e intervinientes.

En mérito de lo expuesto, este despacho, en ejercicio de la función de policía, por autoridad de la Constitución y la ley, procede a emitir la siguiente:

### **6. ORIENTACIÓN SOBRE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS**

Teniendo en cuenta que el requerido no compareció a la presente audiencia, se deja constancia de que, de conformidad con la Circular No. 0016 del 24 de marzo de 2017 expedida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, contra la decisión aquí proferida proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales deberán interponerse y sustentarse en los términos y oportunidades previstas en la normatividad aplicable.

En caso de ser procedente el recurso de apelación, este se concederá en el efecto suspensivo y el expediente será remitido a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Circular No. 201960000199 de 2019, dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien deberá surtirse el trámite correspondiente. En consecuencia, la INSPECCIÓN SEIS (6) “B” DE CONVIVENCIA Y PAZ URBANA DE PRIMERA CATEGORÍA, RESUELVE la presente ORDEN DE POLICIA ,



## Alcaldía de Medellín

**PRIMERO: DECLARAR INFRACTORES** del regimen de obras a los señora **ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.565.383 de Medellín(A) y **JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.037.500.107 de San Roque (A); por comportamientos contrarios a la integridad urbanística, descrito en el artículo 135 literal A. Numerales 4 y 3 de la Ley 1801 de 2016 respectivamente de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Imponer medio inmaterial y material de corrección de la conducta a **ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.565.383, consistente en la siguiente **ORDEN DE POLICIA:**

- 1. ORDENAR** a la señora **ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.565.383 para que, en lo sucesivo, se **ABSTENGAN** de adelantar cualquier tipo de intervención, obra o proceso constructivo que implique modificación de la edificación, sin contar previamente con las autorizaciones y licencias correspondientes expedidas por las autoridades competentes.
- 2. ORDENAR** a **ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.565.383 para que dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la firmeza de la presente decisión, reintegre el urbanismo con respecto a la construcción ejecutada sin licencia urbanística correspondiente al tercer piso del inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70, barrio San Martín de Porres, Comuna 6 – Doce de Octubre, CBML 06060210017, Zona 2 del Distrito Especial de Medellín, identificada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial mediante informe técnico con radicado No. 202320216836 del veintiuno (21) de 2023, consistente en un área aproximada de ciento veintiocho metros cuadrados (128.00 m²).
- 3. IMPONER** a la señora **ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.565.383 medida correctiva consistente en **MULTA ESPECIAL VEINTE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L (\$20.089.000).**

**Parágrafo 1º.** En aplicación del **principio de favorabilidad** consagrado en el artículo 137 de la Ley 1801 de 2016, la presente multa no se hará exigible siempre que el infractor (a), antes de la declaratoria en firme de la presente decisión, acredite ante este Despacho el correspondiente reintegro del urbanismo del sector, retirando lo construido o presentado la correspondiente patente.

**Parágrafo 2º:** La sustracción o violación a las **ORDENES DE POLICIA** aquí descritas, podrán acarrear la imposición de una **MULTA GENERAL TIPO CUATRO (4)** de conformidad con el *artículo 150 de la Ley 1810 del 2016*, Nuevo Código de Nacional de Seguridad y Convivencia.



## Alcaldía de Medellín

éstas podrá configura el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o administrativa de policía establecido en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000.

**Parágrafo 4º:** De conformidad con el *artículo 20*, adicionado por la *Ley 599 de 2000* la obstrucción a esta orden de policía, genera el tipo penal denominado "*Obstrucción a la función pública*".

**TERCERO:** Imponer medio inmaterial de corrección de la conducta al **señor JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.037.500.107, consistente en la siguiente **ORDEN DE POLICIA:**

1. **ORDENAR** al señor **JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.037.500.107 para que, en lo sucesivo, se **ABSTENGAN** de adelantar cualquier tipo de intervención, obra o proceso constructivo que implique modificación de la edificación, sin contar previamente con las autorizaciones y licencias correspondientes expedidas por las autoridades competentes, tales como las Curadurías Urbanas de Medellín.
2. **ORDENAR** al señor **JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.037.500.107 para que una vez quede en firme la presente decisión, retire, por su cuenta y riesgo, el cerramiento y las adecuaciones realizadas sobre el espacio público proyectado en el inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70, barrio San Martín de Porres, Comuna 6 – Doce de Octubre, CBML 06060210017, Zona 2 del Distrito Especial de Medellín,, intervención identificada técnicamente por la Secretaría de Gestión y Control Territorial como ocupación indebida de espacio público mediante cambio de cobertura vegetal por zona dura y cerramiento, en un área aproximada de once punto cero tres metros cuadrados (11.03 m).

**Parágrafo 1.** Para el cumplimiento de la presente orden se concede un plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 810 de 2003, en concordancia con los artículos 135, 140, 222, 223 y 226 de la Ley 1801 de 2016 y demás normas urbanísticas concordantes.

**CUARTO: ADVERTIR** a los declarados infractores; que en caso de persistir la infracción urbanística en el inmueble ubicado en la Carrera 75A No. 96-70, barrio San Martín de Porres, Comuna 6 – Doce de Octubre, CBML 06060210017, Zona 2 del Distrito Especial de Medellín, y de no realizar el reintegro del urbanismo, en lo que corresponde a la demolición, la autoridad de Policía por intermedio de la entidad competente podrá ejecutarla a costa del obligado. Los costos de la



## Alcaldía de Medellín

u órdenes contenidas en esta decisión impartida por la autoridad de Policía, dispuestas al finalizar el proceso verbal abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal, que se transcribe:

*“ARTICULO 454. FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE POLICÍA. <Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.*

**SEXTO:** Teniendo en cuenta que el requerido no compareció a la presente audiencia, se deja constancia de que, de conformidad con la Circular No. 0016 del 24 de marzo de 2017 expedida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, contra la decisión aquí proferida proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales deberán interponerse y sustentarse en los términos y oportunidades previstas en la normatividad aplicable.

En caso de ser procedente el recurso de apelación, este se concederá en el efecto suspensivo y el expediente será remitido a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Circular No. 201960000199 de 2019, dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien deberá surtirse el trámite correspondiente.

**SEPTIMO: SEÑALAR** que esta decisión se notifica en estrados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 223, Numeral 3, Literal d) de la Ley 1801 de 2016.

**OCTAVO:** Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo procédase al archivo del proceso, no sin antes vincular al sistema DEYEL las actas, audios de demás documentos.

  
**ROELIO URIBE GONZALEZ**  
Inspector 6B

**ANA ROCIO MARTINEZ VARGAS**  
Presunta Infractora

**LUIS JAVIER VALECIA**  
Peticionario

**AMPARO DE JESUS VALENCIA DURANGO TABORDA**  
Citada

**CÚMPLASE**

  
**VICTORIA EUGENIA PEREZ ESCOBAR**  
Secretaria

**JHON JAIRO VALENCIA UPEGUI**  
Presunto infractor

**MARIBEL VALENCIA VILLA**  
Peticionara

